

CHILE EN LA ENCRUCIJADA

El empate político.—Una frase que emplean los chilenos, cualquiera que sea su tendencia política, para explicar la actual situación del país es «empate político». El empate político es algo que asalta, que se palpa, que se ve en todos los niveles de la vida chilena. Basta asomarse a un quiosco, basta con oír la radio o ver el televisor, para darse cuenta de ello hasta en los detalles más mínimos. Si más allá de los detalles se intenta penetrar en la realidad del país, la igualdad de fuerzas, el estancamiento de cualquier movimiento, se hace evidente.

No parece necesario recalcar la extrema importancia del proceso chileno. En un país donde jamás se habían puesto en tela de juicio los postulados de la democracia liberal y del sistema capitalista, al menos desde una tribuna tan alta como el Gobierno, se intenta construir una economía socialista y una democracia en consonancia con este régimen económico —no olvidemos que el adjetivo liberal se aplica tanto a economía como a política, ¿por qué no aplicar también el término socialista a la economía y a la política y poder hablar entonces de economía socialista y democracia socialista?—.

Ahora bien, las fuerzas políticas que están en el Gobierno han llegado a él cumpliendo al pie de la letra unas leyes que habían sido decretadas por los regímenes anteriores —representantes de la economía y la política liberal— y que, desde luego, no son las más adecuadas para llevar adelante un programa de reformas estructurales, o de revolución, socialistas. Históricamente, Chile ha sido un país en el que las libertades formales se han respetado. De aquí que el desarrollo de su vida social haya permitido la existencia de grupos o partidos de izquierda que servían de válvula de escape a las reivindicaciones de las clases oprimidas, siempre perfectamente controladas —ellas y las organizaciones que las representaban— por el poder. Los partidos de izquierda seguían, y siguen, las reglas del juego liberales, y así seguían en las elecciones algún es-

caño en las Cámaras o algunos puestos en los Ayuntamientos, siempre en minoría con respecto a los partidos de derecha o de centro. El sistema estaba establecido de tal manera que era prácticamente imposible la victoria, en las elecciones presidenciales, de un candidato de la izquierda. Sin embargo, esta vez el sistema falló. Allende se había presentado tres veces y sólo en esta última logró la Presidencia. ¿Por qué?

Las razones son varias y complejas. En primer lugar, al iniciarse la campaña electoral se concedían pocas probabilidades a Unidad Popular. El hecho hizo que no se tomaran medidas radicales para acabar con la candidatura de Allende. Por otra parte, no era tan fiero el león como lo pintaban —me pregunto por qué utilizó el pasado—: en Unidad Popular coexisten comunistas, socialistas, radicales, católicos, social-demócratas y otras tendencias más; es decir, junto a comunistas y socialistas se alinean partidos que intentan representar los intereses de la pequeña burguesía, que intentan reformas de tipo populista, no revolucionario.

En segundo lugar, los seis años de gobierno de la democracia cristiana —cuya victoria fue saludada como un gran acontecimiento en su momento—, con un programa demagógico, reformista e inoperante, produjeron una radicalización del electorado: la extrema derecha no comprendía el porqué de tanto «liberalismo», y las capas más pauperizadas no encontraban ningún remedio a su situación.

Finalmente, Unidad Popular logró movilizar amplios sectores en apoyo de su programa: obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales. Por lo que se refiere a esta movilización, es importante la labor que desarrollaron los «CUP» (Comités de Unidad Popular). Su creación obedeció sólo a motivos de agitación y propaganda en los barrios obreros y en las regiones campesinas más pauperizadas. Sin embargo, su propia dinámica, su éxito, hizo que pronto pasaran a ocupar un puesto de gran importancia dentro

del programa de Unidad Popular: no eran sólo órganos de agitación y propaganda, sino que se habían convertido en los gérmenes de las estructuras de base de una nueva democracia de signo socialista.

La derecha intentó agrupar todas las fuerzas no socialistas en torno de un antiguo Presidente, Jorge Alessandri, que gozaba de gran popularidad en el centro y la derecha. El apoyo de Alessandri por parte de la extrema derecha no representaba una afirmación de sus tesis, sino un intento de polarizar la elección entre dos candidatos, de poder jugar con la vieja caricatura de «libertad, orden y seguridad» contra «comunismo, opresión y robos». La maniobra fracasó por ser la democracia cristiana el partido numéricamente más importante del país —controla todos los órganos de poder legislativo y, a través de ellos, al ejecutivo— y mantener unas tesis políticas discordantes de la derecha —e incluso del independiente Alessandri— y de la izquierda: frente al «Cierra Chile» de la derecha, que perturbaba el desarrollo de la burguesía industrial, a la que representa ya la DC, oponía un candidato situado más a la izquierda que Frei dentro del partido.

En términos generales, la campaña electoral de la derecha se basó en la «campaña del terror», en una propaganda negativa sobre los funestos resultados de una victoria «comunista». La de la DC, en la continuidad radicalizada de su «obra». La de la izquierda, en una constante movilización de las masas tras objetivos políticos a corto y largo plazo —elección presidencial y paso al socialismo—.

Cuando las fuerzas contrarias a UP comprobaron las posibilidades y las realizaciones (pues los CUP eran realizaciones) de este movimiento, era ya tarde: cualquier reacción violenta podía provocar un enfrentamiento armado. Los grupos de extrema izquierda, o al menos los que tenían una cierta influencia, como el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), que habían propugnado la acción directa y la

guerrilla, pasaron a apoyar, desde fuera, la candidatura de Allende y el programa de UP. Se había producido una radicalización extraordinaria por parte de la izquierda y, si bien admitían la posibilidad de ser derrotados, no permitirían que, en caso de ganar, les fuera arrebatado el triunfo.

Allende obtiene mayor número de votos que sus adversarios, pero, al no haber conseguido mayoría absoluta, no puede ser Presidente sin el consentimiento de las Cámaras, que deben elegir entre los candidatos. Las Cámaras están dominadas por la DC y su candidato, por haber quedado en último lugar, no puede ser designado. Así, pues, la DC, árbitro de la situación, impone condiciones a Allende para darle sus votos, es decir, el triunfo: respetar el sistema político «liberal»; no desvelar las irregularidades cometidas por la Administración DC; finalmente, no revocar ningún nombramiento de cargo público, aparte los ministros y cargos electos.

UP acepta el pacto contra la opinión de sus sectores más radicales; Allende es nombrado Presidente; todo sigue igual.

Todo sigue igual porque ningún grupo tiene la suficiente fuerza, porque ninguno puede imponerse a los demás. El asesinato del general Schneider, inicio de un vasto plan de fuerza derechista, fue desbaratado por la habilidad y, también, la fuerza de la izquierda. UP tiene en su programa la creación de una Cámara única, que rompería el monopolio DC en el legislativo, pero no puede poner en marcha el referéndum necesario porque se lo impide la habilidad y, también, la fuerza de la derecha. La situación es estacionaria, existe el «empate político», pero la inactividad de UP, su mera permanencia en el Gobierno sin avanzar decididamente hacia el socialismo no hace más que beneficiar a la derecha, a los conservadores. El sistema, las formas de propiedad, no ha cambiado. Esto, en definitiva, es lo que interesa a los conservadores.



Allende en la plaza de la Constitución.

Tener el Gobierno no es tener el poder.

—Las masas pauperizadas que apoyaron a Allende pensaban que, por haber conquistado UP el sillón presidencial y las oficinas de los Ministerios, se habría resuelto el paso al socialismo. Pero esta victoria aparente podía volverse en contra de la izquierda si no lograba llevar a buen término su programa. El hecho de haber aceptado, para la etapa de mandato presidencial, las reglas del juego de la democracia liberal viciaba todo intento de reforma. ¿Cómo construir el socialismo dentro de un marco liberal, es decir, capitalista?

La legalidad vigente en Chile reconoce la propiedad privada de los medios de producción como un derecho sagrado. Mientras el legislativo y el ejecutivo estén dominados por la DC, no existe ninguna posibilidad de que, respetando las reglas del juego, cambie la legislación en lo más mínimo. Frente a esto, el ejecutivo UP tiene dos caminos, no excluyentes, para llevar adelante su programa: encontrar fisuras en la legislación que permitan una interpretación acorde con sus deseos, o bien acentuar la movilización de las masas para presionar sobre la derecha y el centro. La so-

lución deberá consistir en hallar la proporción adecuada de cada uno de los elementos. Si se acentúa la movilización hasta un extremo peligroso para la derecha, ésta no vacilará en lanzarse a una aventura de fuerza (a la guerra civil, claro está). Si la movilización es escasa, la derecha seguirá maniobrando, segura de no verse afectada en sus intereses fundamentales, para evidenciar la inoperancia de UP y lo desastroso de su política para el país. No ha sido difícil encontrar fisuras en la legislación. Sin embargo, llevar a la práctica medidas contrarias al espíritu de las leyes, aunque las medidas estén acordes con la letra, significa contar con la fuerza necesaria para imponerlas. De lo contrario, las clases afectadas pueden reaccionar y exigir que se cumpla la ley en su forma tradicional. UP tiene todas las responsabilidades del Gobierno, pero carece del mayor y mejor instrumento que caracteriza a este órgano: el poder.

En un Estado liberal-burgués, el poder no puede pasar a otra clase social, en este caso el proletariado, sin que se creen nuevas estructuras. Se tratará del paso de la democracia liberal a la dictadura del prole-

tariado, para llegar, después, a la democracia socialista.

El camino seguido por UP para hacerse con el poder es largo, y el futuro nos dirá si es correcto. Consiste en estatizar las industrias básicas, conservando las estructuras de la propiedad privada en los sectores menos importantes y creando sectores de propiedad mixta, nacional y privada en los sectores intermedios. Estas medidas intentan minar el poderío de la gran burguesía industrial y financiera, a la vez que favorecen a la pequeña burguesía, una de las bazas más importantes del juego político entre la derecha y la izquierda. A largo plazo, por estar todas las industrias básicas estatizadas, la pequeña burguesía, carente de poder político, aceptaría plenamente las reglas del juego socialistas.

Las estatizaciones podrían llevarse a cabo sin esfuerzo en las industrias deficitarias o poco rentables. En este campo, la derecha no tendría inconveniente en aceptarlas. Sin embargo, cuando se trata de industrias realmente interesantes, no está dispuesta a ceder sin percibir cuantiosas indemnizaciones. Si estas indemnizaciones se pagaran, las industrias de propiedad colectiva

verían mermados sus beneficios, sus posibilidades de reinversión y de inversión, y el dinero pagado a la burguesía serviría para alimentar todo tipo de movimientos contrarios al socialismo. Al mismo tiempo, la clase obrera, que en teoría tendría el control de las industrias básicas, vería que sus condiciones de vida no mejoraban. Si a esto se une el hecho de que el programa de UP no prevé la liquidación de la burguesía como clase más que a largo plazo —lo que significa que continúa con sus órganos de expresión y sus organizaciones—, la incidencia de su propaganda en el seno de una clase obrera dispersa, en un país poco industrializado, puede ser fatal para el paso al socialismo.

En cuanto al campo, las posturas están más polarizadas. Los grandes terratenientes, representados por el Partido Nacional de extrema derecha, ya habían sido excluidos del poder por el Gobierno de Frei. La DC, en sus seis años de Gobierno, promovió una reforma agraria que sólo afectaba a los grandes latifundios. El sistema de reparto de tierras consistía en el «asentamiento». Se repartían tierras a un pequeño número de campesinos, en régimen de propiedad, para lograr constituir

una clase fuerte de pequeños propietarios agrícolas, que serían los mejores aliados de la burguesía en el mantenimiento del sistema capitalista.

Sin embargo, cuando UP ocupó el ejecutivo, el sistema de asentamientos no había sido terminado, ni había tenido tiempo de consolidarse.

Por otra parte, la situación del campesinado pobre chileno es catastrófica. Aparte de las comunidades primitivas, que tienen propiedad sobre pequeños trozos de tierra, «mapuches» —descendientes de los araucanos—, bastante segregadas, existe una enorme masa de «afuerinos» —trabajadores temporeros que recorren el país, una franja larga y estrecha estirada en el sentido de los meridianos, constantemente cambiando de fincas, de trabajo y de clima, para efectuar siempre las labores más fatigosas y peor remuneradas—. Los mapuches se han visto expropiados a lo largo de los siglos por el tradicional sistema de corrimiento de los mojones que señalan los lindes, con los agravantes de nocturnidad y prepotencia de los expoliadores. Junto a mapuches y afuerinos existen también los campesinos que trabajan las tierras ajenas en régimen de aparcería. Para estos últimos, la consigna burguesa de «la tierra para el que la trabaja» tiene un cierto atractivo. No obstante, UP, o los grupos más radicales de Chile, tienen un inmenso potencial para realizar una revolución agraria de tipo comunitario en los mapuches y afuerinos. Al parecer, es en el campo donde la presión hacia el Gobierno para tomar medidas radicales que lleven a un pronto paso al socialismo es más fuerte. Esto se explica por la poca incidencia que ha tenido, y sigue teniendo, la burguesía en el campo y por la profundidad y combatividad del movimiento de masas; a la vez, las medidas colectivizadoras de la revolución agraria de UP han dado resultados más inmediatos que en la industria.

Precisamente por ser, o haber sido, el campo un feudo de la extrema derecha, las medidas contrarias a UP, cuando este movimiento alcanzó la Presidencia de la República, tomaron un carácter más descarado, menos sutil. Los grandes propietarios, además de abandonar, no física, sino agrícola, los latifundios —no plantaron, dejaron perder las cosechas, etc.—, pasaron de forma clandestina casi todas sus cabezas de ganado a Argentina. Una hábil campaña del terror, basada en la supuesta inmediata expropiación de todas las propiedades independientemente de su extensión, hizo que los pequeños propietarios les imitasen por lo que respecta al cultivo de las tierras, pero evidentemente no en lo que se refiere al ganado. Los pequeños propietarios no tenían los medios para hacerlo pasar a Argentina. Entonces, ¿cuál

CHILE

era la solución? Sacrificarlo y obtener un poco de dinero. Siempre sería mejor que esperar sin hacer nada a ser expropiado sin indemnización. La maniobra dio resultado. Los grandes propietarios sabían que el Gobierno carecía del poder y no podía expropiar a los pequeños propietarios. Sabía, además, que éstos eran una baza importante para UP. Por otra parte, Chile ha tenido tradicionalmente dificultades en el abastecimiento de carne. Las regiones ganaderas están en el Sur del país y el traslado de los animales a las zonas consumidoras es difícil y antieconómico. El sistema de transportes es defectuoso y la tardanza del viaje hace que el peso del ganado baje de forma alarmante, con lo que el precio que se paga por cada animal en el punto de destino, unido a los gastos de transporte, convierte su venta en deficitaria. Así, pues, de forma periódica, el Gobierno ordena la «veda» —prohibición de vender carne—. La escasez tradicional —la veda se impuso por vez primera hace muchos años—, unida a la exportación clandestina y las grandes matanzas, ha puesto graves problemas al Gobierno, que debe recurrir a las importaciones, con la consiguiente sangría de divisas. Otro tanto ocurrirá con los diversos productos agrícolas y también con las necesarias semillas para reanudar las faenas del campo.

El desabastecimiento.

El principal caballo de batalla de la derecha y el centro contra UP y, más allá, contra el socialismo, es el intento de demostrar la ineptitud del Gobierno y, consecuentemente, la invalidez de las teorías socialistas, para solucionar los problemas del país. En su razonamiento intervienen varios factores: caos en la producción por falta de técnicos, incapacidad de los obreros para regentar y hacer producir las fábricas, desastres en la agricultura y la ganadería por la «absurda pretensión» de colectivizar la tierra, anarquía, relajamiento del principio de autoridad, etc. En suma, agitan ante la población el fantasma de la carestía y del reinado de la ley de la selva.

La carestía, el desabastecimiento, se nota en algunos casos, por cierto muy limitados. En cuanto a la anar-

quía y el reinado de la ley de la selva, mejor sería correr un oscuro velo sobre lo que la derecha entiende por «orden» en beneficio del buen nombre de ésta y del interés personal de quien escribe, el cual, por otra parte, puede asegurar la total falsedad de la aseveración.

Las causas de la carestía, o del desabastecimiento limitado, son varias y complejas. Por un lado, la primera medida de UP, o una de las primeras, fue decretar un aumento de salarios bastante considerable, a la vez que decretaba una congelación de precios. En un primer análisis, la medida puede parecer demagógica e inflacionista. Sin embargo, puede relacionarse con las medidas archiconocidas del primer señor Ford y con el «henriqueceos» de la NEP. El aumento del poder de consumo de las clases desposeídas debe, en buena lógica, hacer que aumente la producción, lo cual, además de beneficiar a los desposeídos, que tienen acceso al consumo, beneficia a la industria, tanto la estatizada como la privada, y al comercio.

Pero a la buena lógica le falta un dato. El razonamiento anterior sería verdadero siempre que la burguesía estuviera segura —USA, Inglaterra, Francia, Suecia, etc.—, pero no cuando las medidas están destinadas a minar su fuerza. Por lo tanto, el interés fundamental de esa clase no será el puramente oportunista de enriquecerse para después pasar a un régimen socialista, sino el de destruir a ese Gobierno que pretende pasar al socialismo, aunque se vea afectada en sus intereses a corto plazo.

Por otro lado, ya hemos visto cuál era la posición de la burguesía y la oligarquía en el proceso: el boicot —llamado por los chilenos «sedición»—. Así como se boicotea la producción agrícola, se boicotea también la producción industrial, y no sólo a escala nacional, y la distribución. Además, es evidente que en los primeros momentos de un cambio tan importante como el paso del control de las industrias básicas de manos de particulares a manos de la colectividad, la organización y la producción de las empresas padecen de lo que, en términos deportivos, llamaríamos el desentrenamiento de quienes deben ocupar un puesto nuevo y desconocido hasta entonces, sin que esto quiera decir que no son capaces de cumplir el cometido con mayor, o, en el peor de los casos, con igual, competencia que sus predecesores.

La convergencia de estos factores, aumento del poder adquisitivo, boicot y desentrenamiento, llevan fatalmente a la carestía. Finalmente interviene el acaparamiento dictado por el miedo. Sin embargo, la carestía no es alarmante.

La lucha entre el Gobierno y la oposición, entre el Gobierno y los poderosos, los que conservan gran

parte del poder político, tiene uno de los frentes más importantes en la «batalla de la producción», como caracteriza el momento la consigna de UP, en la «lucha contra la sedición momia» (momio significa reaccionario), según los grupos más extremistas, o en el «cese de la aventura», como dicen las derechas. Si la producción no aumenta, si las presiones norteamericanas se hacen más fuertes —la factoría Ford cerró sus puertas y abandonó sus instalaciones en Chile poco después de la toma de posesión de Allende—, si no se consigue controlar las industrias básicas y derribar así el poder de la burguesía, si no se logra poner fin a la sangría de capitales y, finalmente, si no se logra que el precio del cobre vuelva al valor anterior a la nacionalización de las minas, el problema de la carestía podrá llegar a ser verdaderamente angustioso.

En realidad, la derecha, en parte por visión política y en parte por miedo, ha paralizado, hasta donde le ha sido posible, la producción. Si ha sido por miedo, la paralización se debe a que ha puesto sus capitales a buen recaudo. Si es por visión política, aparte de que ha puesto sus capitales a buen recaudo, ha sido por crear dificultades. En cualquier caso, el paso al socialismo exige que la burguesía, como clase, desaparezca en el plazo más breve. No sólo porque es el objetivo del socialismo, sino también porque su permanencia pone en peligro el desarrollo económico y social de Chile, o el mantenimiento del Gobierno de las izquierdas. ¿Puede el programa actual, y los ritmos actuales, alcanzar los objetivos de UP: hacerse con el poder y llegar al socialismo?

Las perspectivas.—Regis Debray, poco después de ser puesto en libertad, hacía una entrevista a Allende. En ella, Debray se quejaba de que UP hubiera descuidado la lucha de clases. Allende, al igual que todas las fuerzas de la izquierda chilena, cree que será inevitable un enfrentamiento decisivo entre la burguesía y el proletariado, al que se unirán las demás clases explotadas. Pero el «compañero» Presidente ha adoptado la táctica de no tomar la iniciativa, de no dar el primer paso para desencadenar la batalla decisiva. Esta postura, apoyada por el partido comunista y la derecha del partido socialista, además de los grupos menores situados a la derecha de éstos en UP, es un arma de dos filos. UP gozaría de mayor prestigio entre las capas medias en el caso de que las derechas hicieran explotar el detonante. Pero las fuerzas antisocialistas sólo actuarán si se ven forzadas a ello, es decir, en el caso de que sus maniobras político-económicas fracasen y de que la iniciativa política esté en manos del proletariado y



En primer término, el Presidente Allende y el ministro del Interior, Toha (recientemente reprobado por la Cámara de Diputados), en el entierro de una víctima del atentado contra Carabineros.

sus aliados. En resumen: la burguesía sólo intentará el uso de la fuerza cuando vea la partida perdida o sus bazas sean muy problemáticas. ¿Pero cómo va a ver su partida perdida si los grupos que en estos momentos dirigen UP no realizan ningún ataque frontal? Claro que, en caso de un ataque frontal, la burguesía también intentaría un golpe de fuerza. Sin embargo, ya que todos ven como algo inevitable el enfrentamiento final —y son pocos los que sueñan en un paso pacífico—, parece necesario escoger cuidadosamente el momento.

En Chile existen cuatro cuerpos armados: Aviación, Marina, Ejército de Tierra y Cuerpo de Carabineros. La Aviación es el Cuerpo más clasista. Para ser oficial de este arma es imprescindible proceder de familias de rancio abolengo o de abultada cuenta corriente (si pueden darse las dos condiciones, mucho mejor); en esta escala le siguen la Marina y el Ejército de Tierra. El Cuerpo de Carabineros es el que cuida del orden interno: es la Policía urbana, rural, de tráfico en las ciudades y en las carreteras, de aduanas y de todas cuantas cosas necesiten Policía. Este Cuerpo tiene una escuela de oficiales, y una escala de ascen-

tos, independiente por completo de la de los demás Cuerpos armados. Así, pues, los jóvenes que desean hacer carrera militar, si son de «buena familia», intentan entrar en la Aviación, en la Marina o en el Ejército de Tierra, por este orden, y si son rechazados, antes de hacerse carabineros, prefieren dedicarse a cualquier otra cosa. Por tanto, la oficialidad del Cuerpo de Carabineros, así como la tropa, procede de las capas medias de la población y es, por ello, más permeable a las tendencias populares.

No existe en Chile ninguna tradición «golpista». El Ejército, que goza de gran prestigio, vive aún de la gloria que obtuvo en la guerra del Pacífico —contra Perú y Bolivia por las tierras que hoy son el extremo Norte de Chile, anteriormente en poder de aquellos dos países—. Además, todos los centros habitados están controlados por el Cuerpo de Carabineros. Esto puede ayudar a explicar el fracaso de la intentona realizada por la derecha con el asesinato del general Schneider, poco antes de la toma de posesión de Allende, y el hecho de que no se haya preparado ninguna otra aventura militar.

Pese a que el Gobierno de UP

haya abierto considerablemente las puertas de las Academias Militares a cadetes procedentes de las clases medias y populares, los resultados de esta política sólo podrán verse a largo plazo; de momento, el Ejército está con la burguesía, aunque haga todo lo posible por parecer neutral.

La izquierda, en cierta manera, está dividida. Los grupos más moderados, PC, derecha del Partido Socialista y los grupos pequeño-burgueses integrantes de UP, quieren consolidar las posiciones conquistadas, es decir, hacerse firmemente con el Gobierno e intentar conquistar el poder mediante las estatizaciones de industrias básicas que minen a la burguesía, para después dar el salto adelante. La izquierda de UP, es decir, la izquierda del PS y el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), que no está integrado en UP, pero que apoya desde fuera, quisieran que el proceso fuera más dinámico, más rápido. Quieren mantener la movilización de las masas y llevar adelante el programa de cambios socialistas, aun a riesgo de que el enfrentamiento se produzca antes. Piensan que, dada la estructura del proletariado chileno, el paso del tiempo

sin que sean visibles las realizaciones, sin conquistar el poder y debiendo sufrir el boicot derechista, sólo favorece a la burguesía. Un programa osado, de claro signo socialista, si bien provocaría el enfrentamiento, haría que las masas hubieran comprendido con mayor profundidad el significado de la revolución. Por tanto, las masas estarían mejor dispuestas a apoyar sus conquistas, su Gobierno, su liberación. El MIR había sido un grupo guerrillero que, sin ninguna confianza, apoyó a UP en el período electoral. Su apoyo se manifestaba en dos vertientes: era mejor votar a Allende, que no votar; los CUP podían ser unas bases muy importantes de actuación. Tras el triunfo de UP, el MIR cesó en la actividad guerrillera, pero inició un programa de agitación muy amplio. Su labor consiste en movilizar las masas para obligar al Gobierno a actuar, para impedir que pueda olvidar cuál es el fin al que pretende llegar.

Al margen de la labor de agitación, el MIR y la izquierda del PS tienen plena conciencia de que el enfrentamiento será armado. Por ello, propugnan la creación de grupos que no sean ni milicias populares ni grupos de autodefensa. En

este momento podrían definirse como grupos de obreros y campesinos con armas e instrucción paramilitar que pueden apoyar al Gobierno si se presenta la ocasión, pero que no intentan provocar ni iniciar la lucha. Un muro de Santiago —casi todos los muros de Santiago ostentan inscripciones— estaba pintado con la siguiente consigna: «Contra la sedición, revolución»; al lado, «Contra el momio, fusil».

Los CUP, que habían desarrollado una labor tan importante durante el período electoral, fueron disolviéndose. Su labor piloto como estructura de base de una nueva democracia socialista se vio frenada cuando UP tomó posesión del Gobierno. En cierta manera, fue una medida de moderación que, como prueba de buena voluntad, dio el PC y la derecha de UP. Por otra parte, existían demasiados problemas burocráticos y demasiadas diferencias entre los grupos que forman la coalición como para prestar atención a los comités.

Sin embargo, aquellos CUP en los que el MIR o la izquierda del Partido Socialista tenían fuerza continuaban funcionando y pueden tener una importancia decisiva en el futuro.

CHILE

Las líneas de actuación de cada uno de los grupos políticos están bien definidas. Frente a esto, las capas sociales a las que los grupos pretenden representar, o representan en función de los intereses que defienden, no están perfectamente alineadas tras sus partidos, casi siempre por razones de tipo oportunista: obreros que creen que la DC les beneficiará a corto plazo o burgueses que piensan que UP hará aumentar las ventas de su empresa, demasiado pequeña como para ser considerada «industria básica».

El Partido Nacional y la Democracia Cristiana están al acecho. Tienen sus trampas muy bien tendidas y esperan que la etapa de go-

bierno de UP sólo servirá para desprestigiar a la izquierda. En caso de que ésta se muestre demasiado peligrosa, se verán obligados a intentar cortarles las alas. La Izquierda Cristiana, reciente escisión de la DC, cuya separación se debió a que ciertos miembros del partido creían en la vocación reformista de éste y no podían tolerar alianzas con el Partido Nacional —hecho que ocurrió en las elecciones para cubrir un escaño vacante en el Senado—, apoya desde fuera, desde la derecha, a UP, pero su programa es democristiano avanzado, en ningún caso socialista. Ya dentro del UP, el Partido Radical y el Socialdemócrata intentan dar gran importancia al área de propiedad mixta, respetando gran parte de la propiedad privada de los medios de producción y limitando todo lo posible el área de propiedad colectiva. Más hacia la izquierda, el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) propugna la utilización del método marxista de análisis de la realidad, sin por ello aceptar las doctrinas leninistas. De hecho, el MAPU no es un partido, sino un grupo importante que carece de una línea clara. El PC chileno está considerado como el más «revisionista» de América Latina. En cuanto al PS, es el

partido más importante numéricamente de UP. Sin embargo, coexisten en su interior una amplia gama de tendencias que abarcan desde en la derecha, a quienes mejor estarían en la socialdemocracia, hasta, en la izquierda, a quienes mejor militarían en el MIR. Finalmente, existe el MIR, del que ya se ha dado una idea aproximada, y algunos grupúsculos de extrema izquierda sin ninguna fuerza real.

Frente a la táctica de la derecha, esperar alerta, se alza la línea oficial, hasta el momento, de UP: consolidar posiciones para después dar el salto, y, frente a ambas, la de la extrema izquierda: movilización y revolución. El empate político subsiste; la izquierda puede caer en la trampa de adoptar medidas populistas para asegurarse la reelección.

La lucha política que se desarrolla en Chile no puede terminar sin vencedores ni vencidos. Los grupos rivales han puesto todas sus fuerzas en el envite. ¿Será posible la «vía chilena al socialismo» o el pecado original de UP, aceptar las reglas del juego liberales sin asestar un golpe definitivo al poder burgués, acabará con la experiencia? La incógnita está lejos de desvelarse. ■ XAVIER GISPERT.

NACIONALIZACIÓN DEL COBRE Y REBAJA DE LAS INDEMNIZACIONES

De los recursos minerales con que Chile cuenta, el cobre es, sin duda, el más importante. El valor de las exportaciones del mineral ha venido condicionando la economía del país desde hace mucho tiempo. En el momento de las elecciones de 1970, que llevaron a la Unidad Popular al poder, los ingresos por este concepto constituían los dos tercios de las entradas de divisas y contribuían en una cuarta parte al financiamiento del presupuesto nacional.

Ya en 1876, Chile abastecía el 62 por 100 del consumo mundial. En 1922 era el primer productor cuprífero del mundo, pasando al segundo puesto, después de esta fecha, precedido por Estados Unidos. Actualmente se encuentra en cuarto lugar, tras Norteamérica, Unión Soviética y Zambia, con el 13 por 100 de la producción mundial.

Sin embargo, y debido fundamentalmente a la tradicional dependencia de las explotaciones del cobre con respecto al capital norteamericano, la riqueza minera no ha contribuido en la medida que era de esperar al robustecimiento de la economía nacional. Esta dependencia se inició en 1905, cuando la Braden Copper, filial de la Kenecott, comenzó la explotación de El Teniente; ocho años más tarde, la Anaconda se adueñó de la mina Chuquibambilla a través de la Chile Corporation Company. Nos encontramos ante las explotaciones más grandes del mundo, la primera subterránea y la segunda a tajo abierto. Desde ese momento, la penetración continuará a ritmos acelerados.

La producción del cobre en Chile creció intensamente a finales del primer conflicto mundial, alcanzando las 321.000 toneladas en 1929. Este aumento se debió, esencialmente, a la acción de compañías norteamericanas, que dejaron en un plano totalmente secundario a las antiguas empresas nacionales, organizadas desde el siglo anterior.

Los conflictos bélicos pusieron de relieve algunas de las consecuencias de la penetración extranjera. El alza del precio del cobre, originada por el aumento de la demanda para la construcción de armamento, suponía una coyuntura favorable para el enriquecimiento del país, pero ya durante la segunda guerra mundial la política del Gobierno de Estados Unidos, al fijar el precio del mineral a niveles relativamente bajos, frustró esta posibilidad. En 1950, durante la guerra de Corea, las tres compañías que operaban en Chile firmaron con el Gobierno de Washing-

ton un acuerdo de fijación de precios, válido mientras durase el conflicto, sin ninguna consulta previa al Gobierno chileno.

Los consorcios norteamericanos hicieron la inversión, pero también fijaron los precios, la participación del Estado chileno y el retorno de capitales al exterior. La aceleración de este proceso llevó al Gobierno de Chile a tratar de conseguir mejores condiciones para el país a través de sucesivas reformas de la legislación.

Este proceso se inicia a partir de la crisis de 1929. Los primeros intentos van dirigidos solamente a retener una mayor parte de los beneficios dentro del país. Así, las Leyes de 1934 y 1939 de impuestos sobre la renta permiten conservar, respectivamente, el 18 y el 33 por 100 de las utilidades de la industria. Hasta 1955 se dictan veinticinco disposiciones en esta línea.

Pero el capital chileno se mostró impotente para suplir la merma de inversiones extranjeras subsiguiente y mantener una minería competitiva a nivel mundial. Los intentos por vía fiscal fracasaron en 1955, cuando con la Ley número 11.828 el Gobierno se vio obligado a conceder de nuevo exenciones favorables al incremento de inversión extranjera.

La subida al poder de la democracia cristiana, con Frei en la Presidencia de la nación, inicia la etapa de la «chilenización» con los llamados Convenios del Cobre. Dichos convenios, al estipular que el Gobierno tiene que poseer el 51 por 100 de las acciones de las grandes empresas cupríferas y mayoría en la dirección, fueron considerados como un paso hacia la recuperación de los recursos para el interés nacional, de carácter más radical y efectivo que las anteriores medidas. Pero los objetivos volvieron a quedar incumplidos una vez más.

Tras los cinco años de «chilenización», el Estado había pagado, por sólo el 51 por 100 de las acciones de las principales compañías, un precio superior al del valor de libros (1). Evidentemente, se temía la intervención del Gobierno de Estados Unidos en defensa de las empresas que podrían haberse considerado «afectadas». Una parte de las descomunales sumas recibidas bastó para toda la inversión realizada con posterioridad. Las compañías no necesitaron traer un solo dólar nuevo. Por otra parte, la producción, que debía haber pasado de 524.000 toneladas a 1.200.000 to-

(1) Activo total menos pasivos exigibles.

neladas, alcanzó apenas las 685.000 toneladas. En cuanto a la refinación programada para 1970, 700.000 toneladas, sólo se llegaron a tratar 360.000 toneladas, es decir, el 50 por 100.

Mientras tanto, las compañías norteamericanas batieron el record de utilidades, pese a controlar sólo el 49 por 100 de las acciones.

En «Hanson's American Letter» (publicación muy difundida entre los inversionistas estadounidenses) se decía: «Ningún Gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo éste (el de Frei) en los convenios que firmó. Su tratamiento excesivamente favorecedor fue tan falto de equilibrio y de juicio y fue tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó hileridad en Washington».

Los sucesivos fracasos en las políticas emprendidas, los graves daños causados a la economía y al pueblo chileno, han abierto paso por primera vez a la nacionalización directa de la minería del cobre a través de la reforma constitucional del artículo número 10 de la Constitución.

La reforma constitucional

El 11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional, el Congreso chileno aprobó por unanimidad la reforma constitucional, cuyas principales innovaciones se refieren «al dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible (del Estado) de todas las minas, covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales». La Reforma establece el monto de las indemnizaciones, las deducciones de éstas de «las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas», se declaran incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación las empresas que constituyen la gran minería del cobre.

Aunque el texto legal hace mención a minería en general, su objetivo inmediato es abrir paso a la nacionalización del cobre, nacionalización que hemos resumido anteriormente y que se concreta en la disposición transitoria número 17 al texto, primer inciso: «... Nacionalizanse y decláranse, por tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación las empresas que constituyen la gran minería del cobre, considerándose como tales las que señala la ley y, además, la Compañía Minera Andina».

Los intereses nacionalizados

Los dos consorcios norteamericanos más afectados por la reforma son la Anaconda y la Kenecott Copper Corporation, cuyas inversiones y utilidades en 1970 eran:

Dólares		
INVERSIONES		
Anaconda...	199.030.000	16,64 % de sus inversiones mundiales
Kenecott ...	145.877.000	13,16 % de sus inversiones mundiales
UTILIDADES		
Anaconda...	78.692.600	74,24 % de sus utilidades mundiales
Kenecott ...	35.338.600	21,37 % de sus utilidades mundiales

Fuente: CODELCO. Citado en «Marcha», 16-VII-1971.



El ministro de Economía, Vuskovic.

Es de notar que las utilidades extraídas, sobre todo en el caso de la Anaconda, resultan espectaculares en relación al porcentaje que representan sus inversiones en Chile con respecto a las mundiales.

El control de ambas compañías sobre el cobre chileno se ejercía a través de las siguientes empresas:

Compañía	Inversiones en millones de dólares
Andrés Mining ...	290
Chile Exploration ...	290
Cía. Minera Exótica ...	44
Braden Copper Co....	262
TOTAL ...	596

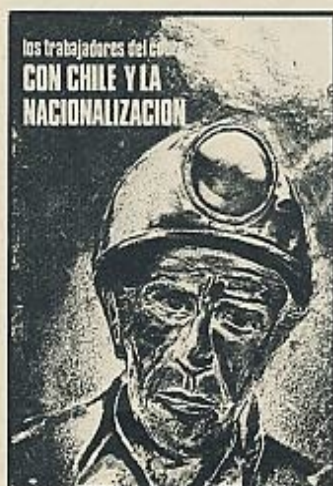
Ambas compañías están vinculadas entre sí.

Fuente: CODELCO. Informe sobre la minería, 1971.

Trabajadores de una industria cuprera: base de UP.



CHILE



Campaña estatal de publicidad en torno a la nacionalización del cobre.

Las tres primeras empresas estaban controladas por la Anaconda, y la cuarta por la Kenecott. Hay que añadir a los consorcios extranjeros la Cerro Corporation, que controlaba la Compañía Minera Andina, con 128 millones de dólares de inversión, lo que eleva la cifra global a 724 millones de dólares.

Reducción de las indemnizaciones

Como ya hemos señalado, el texto legal atribuye al contralor general la fijación del monto de la indemnización que deberá pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales.

Por otra parte, en la norma transitoria número 17, letra B, se instituye la facultad privativa del Presidente de la República para disponer que el contralor general, al dictaminar la indemnización, «... deduzca el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la vigencia de la Ley número 11.828». (A partir del 5 de mayo de 1955.)

Basándose en tales preceptos legales, el Presidente de la República, Salvador Allende, y el ministro de Minería, Orlando Cantuarias, firmaron, el 28 de septiembre de 1971, el Decreto que fijaba las deducciones que debían realizarse en la indemnización de las compañías nacionalizadas.

Las rebajas resultaron ser:

	Dólares
Para la compañía de cobre Chuqucamata, S. A.	300.000.000
Para la compañía de cobre El Salvador, S. A.	64.000.000
Para la compañía de cobre El Teniente, S. A.	410.000.000
TOTAL	774.000.000

El lunes 11 de octubre se pronunció el contralor general, Héctor Huérfano. Según el mandato constitucional, realizó la operación de sustraer del valor de libro las deducciones legales. El resultado estableció que la Compañía Minera Chuqucamata, S. A., deja un saldo negativo para la empresa de 79.500.937,07 dólares; la Compañía Minera El Teniente, S. A., adeuda al Estado chileno la cifra de 310.426.417,21 dólares; el saldo negativo de El Salvador, S. A., alcanza los 1.577.634,58 dólares. Reciben indemnización la Compañía Minera Andina, por valor de 18.269.701,35 dólares, y la Compañía Minera Exótica, hasta un monto de 10.010.445,11 dólares.

Tras el dictamen del contralor general, las compañías podrán apelar ante un Tribunal especial de cinco miembros, como señala la ley.

El último paso en este proceso corresponde al Presidente de la República, que fijará, por Decreto Supremo, el monto definitivo, el plazo, interés y forma de pago de la compensación.

Problemas actuales

Chile ha tomado una decisión importante cara a su futuro desarrollo, pero las dificultades no han terminado, ni mucho menos.

Que el proceso seguido con respecto al cobre ha sido rigurosamente constitucional es un hecho innegable, al igual que se encuentra fuera de duda el carácter de interés nacional que ha revestido la nacionalización y la rebaja de las indemnizaciones.

El señor Radomiro Tomic, en su artículo «Cobre: Lecciones del pasado y riesgos de hoy» (2), señala que: «Tanto la decisión de expropiar como la autorización legal al Presidente de la República para deducir retroactivamente las utilidades excesivas del monto de la indemnización, fueron decisión unánime del Congreso Nacional chileno y no "maniobra comunista", ni "arbitrariedad de Allende", ni "medidas antinorteamericanas para provocar una confrontación con los Estados Unidos". Para ninguno de estos fines se hubiese prestado la democracia cristiana, que tiene por sí sola casi tantos parlamentarios como la Unidad Popular; ni tampoco, por razones obvias, los partidos de derecha». (Los partidos de la oposición controlan más del 60 por 100 del Congreso.)

Tomic sale al paso de lo que se considera uno de los peligros fundamentales de la hora presente: la reacción del Gobierno de los Estados Unidos, que ya ha interpuesto diversas impugnaciones, perfectamente infundadas, sobre la juridicidad de las rebajas.

Pero no todo se reduce a la acción en el plano jurídico. La ya famosa frase de Herbert Klein: «El Gobierno de Allende no durará mucho», sea cual fuere su vinculación con los disturbios derechistas en Santiago, no resulta precisamente tranquilizadora.

Por otra parte, la revista «Newsweek», que juega un papel importantísimo como formadora de opinión en los Estados Unidos, en su número correspondiente al 13 de diciembre de 1971, inserta un artículo intitulado «La marcha de las cacerolas vacías», cuyo análisis resulta significativo. En él se describe a la famosa marcha como un triste cortejo de mujeres hambrientas, vestidas con ropa de tosco algodón y formado en su totalidad por madres de familia de las capas proletarias y jóvenes de la clase media. Si alguno de ustedes puede ver una fotografía de la «triste comitiva», fíjese en las caras de «hambre» que presentan las mencionadas mujeres y en sus «pobres vestidos». Con ello bastará para descubrir todo lo malintencionado del comentario. El último párrafo, luego de una tenebrosa descripción de la situación general en el país, merece ser transcrito. Dice textualmente: «Ya verán —dijo un estudiante la semana pasada—, Vamos a darle a Allende tal cantidad de problemas, que se dará cuenta de hasta qué punto es marxista este país». Para la revista en cuestión tal opinión es más representativa que la unanimidad del Congreso.

No cabe duda de que Chile tendrá que superar muchos obstáculos para reconquistar sus derechos de nación soberana en la práctica. Los problemas se plantean tanto a nivel político como económico, y los golpes se lanzan desde dentro y fuera del país. Pero hay que tener presente que detrás de la Unidad Popular hay un pueblo que no se dejará arrebatar fácilmente el camino andado hacia un futuro mejor. ■ HUMBERTO DA CRUZ-MARIA DOLORES IZQUIERDO.

Principales yacimientos	Compañía	Producción 1970
		Tm.
Chuqucamata	Anaconda	263.400
El Salvador	Anaconda	93.000
La Exótica	Anaconda	1.900
El Teniente	Kenecott	176.000

Fuente: CODELCO.

El reducido tonelaje del yacimiento La Exótica, así como su menor inversión, se deben a su reciente apertura. La explotación comenzó en 1970.

(2) El Mercurio, 18 al 24 de octubre de 1971.